

La democracia latinoamericana, ¿un orden justo y libre? (discusión sobre algunos dilemas coyunturales: notas conceptuales)

Hugo Zemelman

Resumen

La problemática de la democracia latinoamericana es abordada por Zemelman desde el plano de la teoría. Las reflexiones –preliminares, como aclara el autor– giran alrededor de la relación interdependiente y de mutuo condicionamiento entre democracia y los siguientes tópicos: orden y utopía; mercado; política; sociedad civil y participación; proyecto económico; y neoliberalismo. En base a esto, Zemelman indaga sobre el estado actual de la discusión y de la práctica de la democracia en la región, con el objetivo de aclarar los factores que caracterizan el proceso de construcción de la misma: cuáles son sus obstáculos, pero también en dónde están sus potencialidades.

Abstract

Zemelman begins analysing the problems of latinamerican democracy at a theoretical level. The "preliminary" thoughts oscillate around the interdependant relationship and mutual conditionment between democracy and the following topics: utopia and order; market; politics; society and participation; economical scheme and neoliberalism. Looking back upon this, Zemelman investigates the condition of the argument and the way in which democracy is practiced. All these with the only purpose of making clear the various factors which characterize the process in the construction of democracy, what are its drawbacks and also its potentialities.

Este trabajo pretende dar cuenta, en el plano teórico, de la problemática de la democracia en la actual coyuntura latinoamericana. Está orientado a destacar aquellos tópicos que caracterizan el contexto tanto de la discusión como del quehacer acerca de la democracia con todo lo que implican, en cuanto a los equilibrios políticos y sociales, crecimiento económico y acumulación de tensiones, así como de las políticas de legitimación y orden que requiere su conservación.

El problema de la seguridad ciudadana lo conceptualizo como un problema derivado de lo anterior y, por lo tanto, como una expresión sintomática del buen o mal funcionamiento del sistema político democrático.

Pretendo bosquejar los dilemas de construcción, sus obstáculos y potencialidades de cara a una utopía que pueda armonizar individuo y solidaridad, libertad con justicia social, inspirados en un espíritu de alerta que obliga a distinguir entre

lo que se puede considerar consolidado y lo que es aleatorio e incierto en el proyecto de construir una sociedad nueva y mejor.

Como lo dice el título, este artículo es un conjunto de reflexiones preliminares sobre seis tópicos que nos parecen insoslayables, cualesquiera sean las respuestas que se asuman como verdaderas.

Democracia, orden y utopía

Se ha afirmado que la democracia "es la condición, el fundamento de la civilización moderna";¹ pero también se ha dicho que no obstante que la vida no tiene sentido sin la democracia, a la democracia le falta vida (Cioran). En verdad, en el debate sobre la democracia se incluye una vastedad de aspectos heterogéneos que dificultan una concepción de ella que no sea contradictoria. ¿Acaso porque su esencia es contradictoria?

Nos enfrentamos con una forma de organización política cuya fuerza reside en sus propios desafíos de construcción incompleta, en razón de la posibilidad de su constante revisión en materia de organización política, cuya decantación reside en su mismo afán de perfeccionamiento. No es por consiguiente tan paradójico pensar que la democracia sea la alternativa de sí misma: la democracia como democratización creciente.

Sin embargo, esta democratización implica inseguridad, porque la libertad contraviene el orden; entonces, ¿qué orden es el democrático?, o más bien, ¿la democracia es la conciencia crítica ontológica del orden?, ¿es la democracia la presencia tangible de la gran utopía capaz de hacer armonizar libertad y justicia?, ¿es la democracia un espacio de "fundamentalismos" que no puede reducirse a la administración de cosas?

Rescatamos a la democracia como ese espacio de lo público desde donde surgen todas nuestras creencias en lo posible, pero además donde también éstas puedan ser reconocidas por todos los actores individuales y sociales. La cuestión estriba en cómo se puede hacer accesible a todos los grupos el reconocimiento de lo posible. ¿Es un problema de oportunidades reales o, en su defecto, de un lenguaje que pueda disfrazar la realidad misma con una sensación de esperanza pero que, más allá de conformar imágenes, carece de posibilidad objetiva?

La legitimación de la democracia, aparentemente, ha consistido en un equilibrio entre expectativas y cierto grado de materialización de las mismas. Los peores desgarramientos surgen cuando la realización histórica de las expectativas no está siquiera compensada por un lenguaje público que colme la

¹ Octavio Paz, "Una democracia para la esperanza", en Carlos Contreras (comp.), *América Latina una realidad expectante*. Santiago de Chile, Comisión Sudamericana de Paz, 1993, p. 57.

vida cotidiana con esperanzas posibles de ser alcanzadas. Estamos en presencia de la construcción de un mundo simbólico que pueda transferir la realidad secular y agostada a un plano donde la realidad es todo lo posible, aunque permanezca ajena a un tiempo y espacio delimitados.

La democracia es una esperanza por la que se paga un tributo: que la realización de la cotidianidad encuentre su satisfacción en el marco casi escatológico de una esperanza que la proyecte siempre más allá de la mediocridad ambiente y de las estrecheces materiales. La democracia aparece como el sistema político más idóneo para garantizar la vida pública, la cual cumple la función de articular los planos de lo personal y de lo social, de manera que lo propio de la vida personal de los hombres y lo que es constitutivo de lo social no conformen compartimientos estancos sino mecanismos de comunicación. "No se trata solamente de participar en lo social sino de estar en lo colectivo, no como instancia particular de carácter orgánico o institucional sino simplemente de ser un visitante del ágora moderna."²

En este marco, se plantea la pregunta acerca de por qué la democracia se degrada hasta el punto de llegar a una ausencia de contenidos que la corroe hasta la pérdida de credibilidad; pero que, simultáneamente, cuando es quebrada y aplastada por regímenes autoritarios, fácilmente puede convertirse de nuevo en bandera de lucha reivindicativa. ¿Qué es lo que hace que la democracia sea una aspiración tan profundamente sentida, aunque una vez hecha realidad tangible no se sepa valorar?

Se ha hablado mucho sobre la pérdida de cohesión social interna, especialmente grave después que dejan de tener presencia ideologías que cumplieron el papel de cimientos de la interpretación (lo que algunos analistas han caracterizado como "ideologías fundamentalistas"). Es el caso de la "inflación ideológica de los sesenta",³ la cual —no obstante— dio lugar a la "secularización de la política" caracterizada por la pérdida de su dimensión utópica, es decir, al fin y al cabo reducida a la función de administración de cosas. La política restringida a una tecnología de poder que deja fuera de su cometido su papel de fundante de voluntades colectivas, abriéndose el espacio para el surgimiento de "consensos locales... que ocupan unos pocos ámbitos diferenciados de la sociedad".⁴

La ausencia en la política de esta función de amalgamamiento ha creado las condiciones para que la cohesión nacional se debilite, lo cual se agrava en un

² Hugo Zemelman. *Vida pública, estabilidad y conflicto en la democracia*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1990.

³ José Joaquín Brunner. "Los debates sobre la modernidad y el futuro de América Latina", en Gonzalo Martner (coord.). *Diseños para el cambio. Modelos socioculturales*, Caracas, Ed. Nueva Sociedad/Unitar/Profal, 1987, p. 109.

⁴ *Idem.* p. 108.

contexto donde a la potencial polarización propia de la creciente marginalidad económica, social y cultural,⁵ se agrega la situación vernácula de las heterogeneidades étnicas, culturales y espaciales que conduce a que la integración nacional tenga cada vez más que confundirse con el orden político estatal. A pesar de lo anterior, se enfrenta una situación paradójica: en la misma medida en que este orden es el cimiento de la integración, se va produciendo su mismo desmantelamiento como resultado de las políticas de reformas del Estado que requiere la estrategia neoliberal.⁶

El orden político deviene de manera descarnada en un orden policial sin mediaciones legitimadoras, en el que las Fuerzas Armadas se reducen rápidamente a las funciones de control del orden político. Se constituye un nuevo espacio a donde volcar a este estamento en un contexto donde los conflictos entre países es prácticamente inexistente. Ello coincide además con el proyecto imperial de disminuir el tamaño de los ejércitos nacionales en beneficio de un cuerpo armado continental de defensa colectiva.

Democracia y mercado

Si pensamos más allá de las declaraciones públicas de los gobiernos y de los organismos multilaterales, el contexto económico —cuya característica es la

⁵ Así, por ejemplo, en el Distrito Federal, capital de México, "los ingresos del 75 por ciento de la población oscilan en menos de un salario mínimo (aproximadamente 120 dls.); la población con ingresos de más de tres hasta más de diez representa el 20 por ciento; el resto percibe ingresos mayores" (C/r. Rosa Leticia Anchondo, "El problema de la seguridad pública en México", ponencia presentada en el coloquio "Componentes y valor social de la seguridad ciudadana", organizado por la Comisión Sudamericana de Paz y la Secretaría de Gobernación de la República de los Estados Unidos de México, México, D.F., 25-27 de mayo de 1994, p. 49). Desde otra perspectiva, también en el Distrito Federal, más del 60 por ciento de la población de entre 11 y 18 años de edad, que equivale al 18.16 por ciento de la población total (el cual entre población propia, según el INEGI, es de 8 235 744 y flotante asciende aproximadamente a 18 millones), que han interrumpido sus estudios no se han insertado en el mercado laboral formal. Por otra parte, según datos del Consejo Nacional Contra las Adicciones, "más de la mitad de los adolescentes... reconocen haber consumido alcohol o drogas. Las conductas graves antisociales, cometidas por menores como son homicidio, violación, asalto a mano armada... se han incrementado doce veces en el curso de la última década" (*ibid.*, p. 56).

⁶ "En una caracterización general (de México) se ha establecido que el régimen actual de gobierno ha acelerado una revolución económica estructural que incluye la privatización de la economía; la reducción en el tamaño del Estado y una apertura de la economía hacia el exterior. Estas medidas tienen repercusiones domésticas... se mantienen las viejas desigualdades económicas, políticas y sociales y surgen nuevos problemas. La suma de estos factores está alentando un proceso de organización social que sumado a una pérdida de efectividad de las instituciones (autoritarias), ha incrementado notablemente las exigencias de una auténtica democracia" (*ibid.*, p. 60).

polarización social— es incompatible con los esfuerzos de equidad. El problema no es crecer para después distribuir, ya que en tanto la riqueza es poder, no puede crear las condiciones de igualdad. La estrategia de crecimiento económico con base en la concentración es contradictoria con la equidad.⁷ La equidad como planteamiento para trascender los límites de la desigualdad constituye una

⁷ En México, para "el primer semestre de 1993 se reportaba que 7 de cada 10 empresas medianas y pequeñas se quedaron sin crédito. Que la pérdida acumulada de empleos totales en la industria manufacturera entre marzo de 1992 y el mismo mes de 1993 se elevó a 6.4 por ciento, el aumento más alto del sexenio, equivalente a una pérdida mensual promedio de alrededor de 263 mil fuentes laborales y alrededor de 263 mil plazas en el lapso señalado. En marzo de 1994 el empleo manufacturero había registrado un descenso del 14.9 por ciento con respecto a la planta laboral de 1992. Lo que implicó el despido de por lo menos 508 mil trabajadores en 1993 (INEGI, IMSS y STPS)" (Cfr. Rosa Leticia Anchondo, *op. cit.*, p. 65). En ese mismo sentido, "en 1993, 42.7 por ciento de los negocios recortaron personal, contra 30 por ciento que lo hicieron en 1992... Aproximadamente 10 millones de la PEA (40 por ciento) están desempleados, subempleados o refugiados en el sector informal de la economía. A los que se suma en 1993, un millón 150 mil trabajadores desmovilizados" (*ibid.*, p. 65). Para marzo de 1994, el Instituto Mexicano del Seguro Social estimaba "que el desempleo y subempleo en el país son extremadamente graves: en los dos últimos años disminuyó en 266 mil el número de asegurados permanentes en el IMSS y el déficit de crecimiento de empleos durante el sexenio es de 3 millones (CTM)" (*ibid.*, p. 66). En el lado opuesto de la medalla, se constata que "con la reprivatización de la Banca y la desincorporación de empresas paraestatales, durante este sexenio, grupos como CARSO, VISA, TELMEX, ALFA Y GMEXICO, concentran 50 por ciento de los activos y 55 por ciento de las utilidades en operación de todo el país" (*ibid.*, p. 67); además, "los cinco grupos financieros más grandes del país Banamex/Accival, Bancomer, Comermex/Inverlat, Multibanco Mercantil/Probursa y Serfín/OBSA, concentran el 75 por ciento de los servicios de banca y crédito, 66 por ciento del mercado de sociedad de inversión y 52.4 por ciento de la custodia de valores en casas de cambio" (*ibid.*, p. 67).

Por otra parte, en el informe sobre Argentina, se constata que "lo fundamental en el abordaje de un proyecto de desarrollo es... captar que no hay transformación productiva sostenida y durable, con impacto sobre el desarrollo global, si no se consigue distribución equitativa del excedente, incorporación de los excluidos, crecimiento de los servicios sociales esenciales y reformas al Estado suficientes para lograr esos objetivos (...) La economía y la política comparada sugieren que la creatividad económica y técnica va acompañada de ciudadanos activos, informados y comprometidos. Lo no viable es pretender el desarrollo democrático independiente del progreso material" (Cfr. Pablo Frederick, "Seguridad urbana en América Latina: el caso argentino", ponencia presentada en el coloquio "Componentes y valor social de la seguridad ciudadana", organizado por la Comisión Sudamericana de Paz y la Secretaría de Gobernación, México, D.F., mayo de 1994, pp. 56-57).

Los datos anteriores se pueden complementar con las observaciones de PREALC, acerca del papel que cumple el sector informal y el deterioro cualitativo de la oferta de empleo (que constituye una forma de marginación): "De cada cien nuevas ocupaciones que se generaron durante el trienio 1990-1992 en la economía latinoamericana, 81 se concentraron en el sector informal y en la pequeña empresa" (la empresa que, en el caso de México, como vemos, está quedando al margen del crédito bancario). Se acentuó la tendencia observada desde 1980 "con lo que entre ese año y 1992 la gran empresa privada y el sector público absorbieron apenas a uno de cada cinco ocupados (20.6 por ciento del total)". Y agrega: "el desempleo abierto se encuentra en niveles semejantes a los detectados a comienzos de los ochenta". Ahora bien, en la medida que la oferta de empleo proviene principalmente del sector informal, "la calidad de los empleos que se están creando en la región tiende a deteriorarse. Por otra parte, los desocupados en América Latina carecen de protección social o la que tienen es muy insuficiente, a diferencia de lo que sucede con los afectados por el mismo problema en los países desarrollados". (PREALC *Informa*, núm. 32, septiembre de 1993).

formulación puramente prescriptiva, por lo tanto formalista, extrínseca a las dinámicas socio-económicas reales.

El dilema a la situación actual supone elaborar discursos alternativos más profundos. La necesidad de nuevos horizontes exige traspasar las fronteras del actual discurso político, pues lo posible se puede mostrar mejor fuera de su lógica predictiva estrecha. De lo que se trata es de diseñar imágenes de "futuros deseables", como "forma para disminuir la incertidumbre, de controlar los espacios de lo desconocido". Lo que decimos sobre esta alternativa no supone que el discurso utópico deba ser fundamentalista; por el contrario, la utopía debe ser historizada. Hay que encontrar caminos no usuales para transitar la realidad, reafirmando las potencialidades de lo necesario.

En consecuencia, hacer política no se restringe al logro de metas, sino debe contribuir a crear situaciones en las que los hombres, desde la cotidianidad misma, encuentren un sentido que pueda servirles para amalgamarse con otros sentidos más globales. Un discurso capaz de construir la realidad y evite reducirse a la administración del Estado, especialmente cuando éste se identifica con una estrategia excluyente y ésta, a su vez, se confunde con la realidad.

¿Cuáles son los actores de la utopía? ¿En qué se pueden diferenciar unos actores de otros? ¿Cómo se puede caracterizar la voluntad de transformación necesaria para poder forjar una visión alternativa y enseguida transformar la utopía en viabilidad histórica? En este sentido, ¿cuáles son las alternativas a la situación actual?

Si la democracia se presenta justamente como una difícil reconquista después de la caída de los regímenes militares, debemos atender a la circunstancia de que su preservación depende de conservar su equilibrio, el cual se pretende cautelar, en este momento, a través de la política de los consensos. "¿Es posible concebir alternativas de sociedad sin atentar en contra de la democracia? La lógica del consenso social con que actualmente en forma dominante se manifiesta la defensa de la democracia... descarta, a lo menos en el corto plazo, esta posibilidad".⁸

En efecto, cabe plantearse si estos consensos son condición de equilibrio de naturaleza tal que no admiten opciones, pues se correría el riesgo de destruir el sistema democrático; por lo tanto, se transforman en obstáculos para buscar alternativas, no a la democracia, sino a las políticas económicas y sociales con que hoy se identifica. En esta dirección surge un problema de fondo: ¿es legítimo identificar democracia con mercado? ¿Se puede continuar con una política en la que a costa de conservar la democracia recuperada después de la "caída" de los regímenes militares, no se pueda discrepar de las políticas económicas que

⁸ Hugo Zemelman, *op. cit.*

agudizan la desigualdad y, en consecuencia, la polarización, sin que se considere que esos instrumentos sean atentatorios contra la democracia? ¿Los riesgos sobre la democracia no se contienen, acaso, en esa misma política?

Los mayores peligros de la democracia se encuentran en la acumulación de tensiones y en las heterogeneidades estructurales. Los retos planteados determinan que la democracia política cada vez menos puede preservar espacios de opciones; más bien, se fortalece con mecanismos orientados a inhibir lecturas de alternativas.

En los marcos de la democracia se enfrenta una acumulación de tensiones que no tienen salida porque la política de consensos, además de permitir paradójicamente que surjan, bloquea su solución. Política que reconoce como uno de sus objetivos fundamentales impedir que aparezcan actores sociales y políticos que claramente sean capaces de protagonizar proyectos discrepantes respecto del modelo dominante.

En el corto tiempo se enfrenta una situación potencialmente explosiva. Por una parte, no se observa el surgimiento de ningún contra-discurso con el atractivo de convocante. Y por la otra, la reducción de la política a una tecnología de poder que se corresponde con la pérdida de su dimensión utópica, determina ciertos márgenes de ingobernabilidad civil.

Se requiere recuperar la idea de proyecto que trascienda los estrechos límites de la lógica de la administración de cosas, volverse a apropiarse de la idea de construcción que conforme un sentido de futuro para diferentes actores. Como se ha dicho, "lo fundamental no son los mecanismos o formas de gobierno. Lo trascendental es la manera como el sistema político selecciona sus objetivos y metas".⁹

La política como administración y como proyecto

Si el consenso es necesario para la estabilidad, ¿asegura la estabilidad un crecimiento suficiente para absorber las demandas sociales?, ¿qué significa construir el consenso con base en la ecuación democracia-mercado? Resulta procedente formular estas preguntas porque se constata que, efectivamente, "la mayoría (de los dirigentes políticos y científicos políticos latinoamericanos) coincide en que la democracia como sistema político y la economía de mercado constituyen hoy las reglas del juego para el proceso político latinoamericano".¹⁰ Nuevamente se nos coloca ante el dilema de lo que significa la construcción de

⁹ "Una democracia para la esperanza", *op. cit.*, p. 59.

¹⁰ Edmundo Jarquín, "Asedios a la gobernabilidad", en *América Latina, una realidad expectante*, *op. cit.*, p. 136.

realidades, esto es, de dos acepciones diferentes aunque no necesariamente incompatibles de la política: la política como administración y la política como proyecto.

La primera apunta a mantener un *status quo* en cuyo marco de exigencias se busca acumular fuerzas que puedan garantizar la administración del proyecto dominante; por lo tanto, la acumulación de fuerzas equivale a fijar una mayoría en torno de directivas básicas que reflejen los parámetros de la política neoliberal. De esta manera, las discrepancias ideológicas quedan reducidas a un juego subordinado al respeto de estos lineamientos, en forma tal que la lucha ideológica viene a ser el reflejo de ciertas identidades ideológicas que se han venido sedimentando históricamente, pero que en verdad carecen de realidad en tanto actores políticos y sociales.

La segunda acepción de política apunta a reivindicar a la democracia como juego de proyectos político-ideológicos que conlleva distintas visiones de futuro, mediante las cuales los actores políticos y sociales definen el sentido de su quehacer y, por lo mismo, su propia justificación para llegar a tener presencia histórica. En esta perspectiva, la dimensión referida a la administración de cosas está subordinada a la definición de los espacios de construcción; esto supone, en primera instancia, la necesidad de enfrentar la lógica de manejar distintas situaciones, develando los parámetros que la encubren como realidad que, en tanto tal, puede ser leída desde ópticas diferentes (por ejemplo, el ámbito de la educación, de la salud, de la industria, etcétera).

Resulta claramente diferente acumular fuerzas para una u otra situación. En el caso del marco de una política de administración, el acuerdo de forjar fuerzas es parte del afán por crear un espacio de alianzas que impidan el desencadenamiento de contradicciones que despierten en los actores participantes en la alianza la necesidad de rescatar sus identidades ideológicas anteriores (como sería el caso del Partido Socialista de Chile en su alianza con el Partido Demócrata-Cristiano).

Pero si nos colocamos en la perspectiva de la política como proyecto, la acumulación de fuerzas tiene que ver con la creación de las condiciones de viabilidad del proyecto, en términos de no cuestionar la reproducción de los actores comprometidos con el proyecto dominante; reproducción que puede verse afectada, en el corto y mediano tiempo, por la caída del sistema democrático. La cuestión debe plantearse, no obstante, con base en el siguiente dilema: que la permanencia de la democracia no obligue a determinados actores a aceptar su subalternidad como requisito para garantizar su existencia y reproducción. Desde otro ángulo, lo anterior significa que la condición que garantiza la conservación de la democracia descansa en que se mantenga el proyecto económico dominante.

El principal desafío consiste en "trascender el dinamismo espontáneo del mercado y el crecimiento", ya que la crisis de credibilidad que afecta a muchos gobiernos proviene del creciente empobrecimiento, marginación y aguda anomia con todas sus consecuencias en el plano de la patología social.¹¹ ¿La democracia facilita que las potencialidades de los diferentes grupos sociales lleguen a plasmarse en proyecto? Hacerlo significa reconocer alternativas de proyectos pero, además, que éstos puedan reformularse de acuerdo a las condiciones que conforman el conjunto de los grupos. Esto conlleva que la democracia se deba abrir en la dirección de intereses sociales eventualmente discrepantes.

Sociedad civil y participación

Sin embargo, la situación parece ser la contraria. El proceso de democratización sirve para legitimar una exclusiva estrategia de crecimiento económico, la cual gradualmente va requiriendo delimitar cada vez más los espacios públicos, cercenando las formas de representación orgánica que puedan, por lo mismo, llegar a expresar la voluntad efectiva de demandas y concepciones de futuro contraria a la dominante. Se observa un proceso de divorcio profundo entre la representación política y su base social, lo que se corresponde con la primacía de la condición de ciudadano por sobre la de voluntad colectiva.

¹¹ En Colombia se observa un proceso de "cualificación" o "profesionalización" del delito según el cual éste tiende a ser ejecutado a través de esquemas organizacionales o empresariales que permiten, por un lado, una mayor distribución y especialización del trabajo criminal en sus distintas fases de ejecución —*iter criminis*—, así como la configuración de un amplio y macabro "mercado laboral" de gente dispuesta a ejecutar delitos a cambio de una suma de dinero. Y por otro, la utilización intensa de recursos financieros (acceso a líneas de crédito ilegal), tecnológicos (comunicaciones y transportes) y bélicos altamente sofisticados. Se ha creado así un "mercado del crimen" que obedece, brutal e incondicionalmente, a leyes de la oferta y la demanda". Cfr. Miguel Angel Afanador, "Santa Fe de Bogotá D.C. Una Ciudad en Construcción", ponencia presentada en el coloquio: "Componentes y valor social de la seguridad ciudadana", organizado por la Comisión Sudamericana de Paz y la Secretaría de Gobernación. México, D.F., mayo de 1994, p. 93. Por su parte, en Argentina "la desarticulación sindical (reducción de puestos de trabajo y leyes laborales flexibles), la crisis de representatividad de los partidos políticos, que no deja de ser importante a pesar del apoyo de la población a la democracia, y el cada vez más disminuido papel del Estado en cuestiones sociales, fomenta la acción individual y desestructurada de miles de personas que han pasado a engrosar las filas del cuentapropismo, el trabajo informal, el subempleo o el desempleo abierto, sin instituciones que le permitan reorientar sus capacidades, conservar sus beneficios sociales y mantener un ingreso mínimo. En una sociedad donde el trabajo ha sido un fuerte elemento de identidad social y personal, la desocupación produce trastornos serios en los hogares y un sentimiento de frustración e inutilidad del trabajador ante sus familiares quienes también son afectados por la falta de oportunidades y sufren cotidianamente el embate de los medios y el mensaje consumista de ganadores y perdedores según el dinero que dispongan." (Cfr., Pablo Frederick, *op. cit.*, pp. 26-27).

Una democracia que debilita sus espacios de cohesión pública y refuerza la atomización de la sociedad civil no pasa de constituir unos cuantos fuegos fatuos, sin la trascendencia de que se traduzcan en resultados permanentes y de largo aliento. De ahí que el reclamo por una mayor participación de la sociedad civil y la reivindicación del papel soberano de cada individuo en su condición de ciudadano, se corresponda con una gran apatía e indiferencia por el propio juego democrático. ¿Acaso tiene razón Cioran cuando dice que la democracia carece de vida?

La vida de la democracia se asocia con la posibilidad de que en su contexto institucional se pueda potenciar el desenvolvimiento y expresión de diferentes grupos sociales que, en tanto representan intereses opuestos, lleguen a plasmar sus potencialidades en proyectos, si no divergentes, al menos no coincidentes; heterogeneidad que obliga a un reconocimiento de las alternativas sociales y políticas que la democracia como sistema político pueda legítimamente encauzar. Ello se vincula con la dirección que puede reconocer la evolución misma del régimen democrático, en cuanto asumir contenidos ideológicos diferentes.

Esta gran apuesta de la democracia es la que se cuestiona en la actualidad, en la medida que ella aparece cerrada a un solo proyecto económico. La democracia deviene en un orden político en el que la relación con la sociedad civil se organiza con una cierta autonomía de esta última respecto de las exigencias del Estado, aunque en la práctica sea éste el que encarne el orden. Esta situación se agrava con la difuminación de las inquietudes de la sociedad civil en mil expresiones menores carentes de presencia y gravitación sobre el poder.

Lo que decimos se traduce en una atomización de la sociedad con la consiguiente debilidad de los espacios públicos de confrontación y discusión, ya que al mismo tiempo que se estimulan las manifestaciones de la sociedad civil, se tienen que tomar las medidas indispensables para su control. Control que consiste en la conveniencia de que la efervescencia ciudadana, rescatada como una forma de sustitución de la emergencia de voluntades colectivas, quede efectivamente reducida a lo que se pretende que es: la voluntad individual y aislada del ciudadano votante. Y con ello lograr frenar sus demandas crecientes que vienen a ser el resultado de "una sociedad democrática, plural y participativa".¹²

En realidad, de no ejercer un control de estos anhelos y demandas, la democracia dejaría de ser un orden instrumental, o funcional, para el logro de un proyecto económico como el neoliberal. De ahí que la democracia inevita-

¹² "El desarrollo económico y social con equidad. Un largo camino", en *América Latina una realidad expectante*, op. cit., p. 40.

blemente se transforma cada vez más en un orden, en detrimento de la preservación de su condición de espacio público que posibilita el juego entre proyectos alternativos. El desafío que enfrenta está conformado por la dialéctica demandas crecientes-capacidad limitada de respuesta, lo cual determina que el rango de insatisfacciones existente en vastos sectores de la población sirva de apoyo para transformar el conflicto latente en un estado casi de normalidad. Tal situación obliga a recurrir a mecanismos de control que aparecen en contradicción con la democracia como espacio de fuerzas.

Cada vez de manera más ostensible, la lógica del orden se va imponiendo sobre la lógica de la participación y sobre las formas de manifestación de las heterogeneidades de intereses; más aún cuando el dinamismo profundo que explica esta inestabilidad en aumento está determinado por la concentración y rentabilidad del capital. ¿Cuáles son las posibilidades de frenar esta lógica para así evitar la acumulación de tensiones todavía latentes?¹³

Estrategia económica y política de equidad

La ingobernabilidad con que se ha asociado a la democracia es expresión de este conflicto, el cual mientras no sea enfrentado (lo cual es imposible en el marco de un capitalismo liberado de controles como lo exige la transnacionalización del capital), hace inevitable que cualquier política de equidad esté subordinada a políticas de orden, es decir, restrictivas de los espacios de participación política. En este contexto, no se puede dejar de advertir que no necesariamente la política equitativa tiene siempre que corresponder con regímenes democráticos. Tal ha sido el caso de los Estados-corporativos. Estos pueden hacerse compatibles con políticas de apertura económica. La antinomia histórica es que un régimen no es justo necesariamente por ser libre, como tampoco se alcanza la libertad por vía de lograr la justicia social.

Tanto es así, que observamos ajustes de las políticas neoliberales que recurren al expediente de la ayuda estatal al sector privado con recursos públicos. De esta manera, la condición misma de su éxito —hacer descansar el principal dinamis-

¹³ En relación con Argentina, se sostiene que "las políticas de ajuste, donde la liberalización económica a ultranza es el elemento central de la estrategia de desarrollo, son desestabilizadoras en sí mismas puesto que el reducir la atención estatal en ámbitos tan importantes como la educación, la salud y otras actividades sociales y, en definitiva, desentenderse de ellas, activa una 'bomba de tiempo', cuya sola presencia, en palabras de Waldo Ansaldi, 'puede ser utilizada por los militares y/o por fuerzas políticas civiles afines como pretexto para reintroducir o mantener las funciones y capacidad de intervención represiva interna' ". Incluso para los beneficiarios del sistema, "esta 'bomba de tiempo' hará que, en pocos años más, la sociedad se vuelva incontrolable en términos de seguridad" (Cfr. P. Frederick, *op. cit.*, p. 54).

mo económico y social en la empresa privada— se logra vitalizando a ésta y saneándola con políticas estatales (por ejemplo, políticas tributarias, legislación laboral flexible, auxilios financieros a los bancos, transfiriendo inversiones públicas en empresas, incluso en infraestructura, a bajos precios, etcétera).

Parece evidente la imposibilidad de un proyecto de desarrollo capitalista en Latinoamérica sin el apoyo del Estado. Si consideramos la debilidad de la capacidad empresarial, no sólo económica y financieramente hablando, sino también tomando en cuenta sus aspectos culturales, no podemos ser optimistas acerca de que se pueda esperar un comportamiento "racional capitalista" de este sector. Su condición periférica y dependiente se manifiesta en formas de comportamiento sin perspectivas en el largo tiempo (tales como la incapacidad de ahorro del excedente producido, la tendencia al consumo suntuario, las mismas limitaciones para innovar tecnológicamente y otras).

Lo anterior se agrava si se toma en cuenta que la apertura comercial en boga equivale a la transnacionalización del capital, cuestión que supone perder el control de las decisiones en relación directa al aumento de la inversión externa, la cual al estar orientada por prioridades que no necesariamente toman en cuenta los equilibrios de la estructura productiva interna, provoca una fuerte desarticulación del aparato económico del país (por ejemplo, las altas tasas de crecimiento que ha experimentado en muchos países el sector financiero contrastando fuertemente con el crecimiento promedio de los demás sectores productivos).

En el plano político, lo dicho se expresa en un creciente poder de este sector minoritario en desmedro de los otros, lo que determina una pérdida de equilibrio entre las diferentes fuerzas sociales internas en su acceso a los centros de decisión, en la gravitación de su presencia pública (por ejemplo, su influencia sobre la sociedad civil) y en su capacidad de reproducción. Como consecuencia de estas dinámicas económicas los países dejan de ser proyectos de nación para convertirse en territorios en los que se reproduce un segmento del capital internacional. Esto, aunado a la restricción de los espacios públicos y a la consiguiente ausencia de participación —con su correspondiente carga de indiferencia y escepticismo, toda vez que la democracia se restringe a un proyecto económico concentrador de la riqueza—, termina por influir en el progresivo deterioro en la eficiencia de la democracia como sistema de poder.

En efecto, se puede observar como situación sintomática que las decisiones que se adoptan a nivel de gobierno muchas veces no tienen aplicación, en razón de que están condicionadas a alianzas que sectores de la clase política forjan para fortalecerse como representantes legítimos y garantes de particulares sectores económicos. Ello refuerza su dependencia a una lógica clientelística que

es la base para ejercer presiones que deben ser satisfechas para ganar mayor influencia.¹⁴

Estas políticas de raigambre clientelístico desvirtúan cualquier racionalidad instrumental de la burocracia estatal que, agregado a la falta de una clara preeminencia hegemónica de un sector social sobre los otros (decimos hegemonía, en el sentido gramsciano, en oposición a la dominación coactiva), se traduce en una suerte de parálisis de los gobiernos y la consiguiente ineficacia del Estado.

El sector privado es parte de esta situación de parálisis que se agudiza porque el modelo neoliberal, como resultado de las políticas de privatizaciones, ha profundizado la identificación entre poder económico y poder político. Se ha perdido la "autonomía" de decisiones de la clase política, la cual en medida significativa se ha transformado en instrumento de sectores económicos particulares. Estos, por su parte, están sometidos a fuertes pugnas internas que convierten a los gobiernos —en general, al sistema político— en campos de batalla entre cúpulas político-económicas. Estos grupos comparten el mismo proyecto global y se visten con el traje de la democracia, pero disputan sin escrúpulos su administración y control: tanto de la economía como de los mecanismos de representación política.

Neoliberalismo y democracia

La situación de inestabilidad interna y la ausencia de políticas capaces de construir cohesiones que sean reales (no simplemente impuestas a través de bloqueos ideológicos como son las políticas de consensos), esto es, que aseguren un espacio de reproducción a los diferentes sectores sociales, plantea que para alcanzar una mínima estabilidad se debe optar por forjar una real subalternidad de aquellas fuerzas sociales que no forman parte del núcleo dominante (empresariado vinculado al capital internacional).

Tal situación, como decíamos más arriba, constituiría una transgresión al régimen democrático. Una táctica en esta dirección puede consistir en propender a una especie de coparticipación en la administración del Estado de distintos segmentos de la clase política que, históricamente, se han identificado como representantes políticos e ideológicos de sectores sociales divergentes (tal es el

¹⁴ En Colombia, sólo a manera de ejemplo, ya que la situación es generalizable, "los procesos electorales adquieren un carácter mercantil, compraventas de votos y conciencias ciudadanas en dinero o en especie, recolección de cédulas, transporte colectivo para el elector. En las licitaciones públicas y en la presentación de entidades que suministran bienes y servicios al Estado no siempre coincide la buena calidad de los mismos con el interés privado que mueve su selección. La motivación política y electoral final está acompañada, con frecuencia, de un interés económico por las comisiones y los sobornos que se presentan a todo lo largo de la jerarquía administrativa de la ciudad" (Cfr. Miguel Ángel Afanador, *op. cit.*, p. 78).

caso de Chile con la incongruencia del Partido Socialista en la co-administración del proyecto neoliberal). Esta opción supone, sin embargo, transformar a la pobreza en fundamento de subalternidad. Peor todavía: agregar indignidad a la subalternidad.

La necesidad de convertir a la pobreza en mecanismo de legitimación exige una manipulación de la conciencia de "ser pobre", a fin de transformarla en una conciencia que privilegie el valor de ser libre por sobre la condición de pobreza; una libertad cuyo ejercicio quede circunscrito a los límites más cercanos a la sobrevivencia o condición de vida mínima. Libertad individualista que se defiende con la renuncia a todo empeño colectivo por ejercer presiones, una libertad que reivindique lo privado como negación de los espacios sociales organizados y que, por lo mismo, no puede servir para ejercer presión real sobre el sistema económico. Los sujetos que surgen en este contexto se caracterizan por la conciencia mínima de todo: mínimas necesidades, mínimas demandas y, por lo tanto, mínimas presiones.

Las consecuencias socio-políticas y culturales de lo anterior son claras: se comete un atentado, una violación a la cultura política democrática puesto que ella, por el contrario, consiste en el reconocimiento y exigencia de un juego de intereses que legítimamente apuesten por una alternancia en el ejercicio del poder.

Cuando se renuncia a ejercer demandas se termina también por renunciar a la democracia como espacio, contribuyendo a reforzar a ésta como un sistema que cada vez en mayor medida se identifica con un proyecto económico particular. Se puede fortalecer la tendencia a regímenes con predominio de civiles, pero eso no significa que se fortalezca la democracia como espacio que garantice la pluralidad en el juego de las alternancias. El carácter civil de los regímenes no es contradictorio con el cuidado por la primacía de un orden estable. Se requiere de un orden que responda a las necesidades del proyecto económico. La concordancia entre orden democrático y proyecto obliga a tener que establecer reglas de alternancia congruentes con estos requerimientos, de manera de asegurar una sucesión gubernamental sin perturbaciones, es decir, que garantice la continuidad de las políticas.

De no ser así, la alternancia en el poder puede convertirse en un riesgo contra la democracia identificada con un proyecto económico que se pretende emancipado de toda tutela estatista. En esta lógica, el mismo proyecto traspasa sus propios límites de ser una estrategia de crecimiento económico para convertirse en una verdadera concepción de la sociedad del futuro. Concepción de futuro que plantea la necesidad de un orden político que le sea funcional. De esta manera, cualquier discurso de disenso de la estrategia económica se transforma *ipso facto* en un discurso contrario a la democracia como tal.

El proyecto económico no solamente quiebra a la democracia por lo que hemos expuesto. También se conjugan otros factores muy profundos que llevan en el mediano y largo plazos a consecuencias contrarias a su conservación. Si el proyecto económico tiene como fundamento la capacidad de innovación tecnológica, y ésta depende de la propia acumulación de capital —encontrándose cada vez más condicionada por la concentración de éste—, surge una contradicción con la democracia entendida como espacio: ésta no puede ampliar sus espacios de participación reales como mecanismo de legitimación (por ejemplo, reconocimiento de las pluralidades de sujetos y de las heterogeneidades sociales y culturales), en la medida que dicha ampliación se puede convertir en un conducto a través del cual se puedan ejercer presiones disfuncionales para las condiciones de rentabilidad del capital. En este contexto, ¿qué otras medidas se pueden formular para la legitimación de las políticas de concentración regresiva del ingreso? El discurso neoliberal contiene, en este plano, exigencias utópicas. Tal es el caso de aquella que aduce que la concentración del excedente puede derramarse para beneficiar a los demás sectores sociales y estimular así el despegue económico. Más allá de su reclamación ideológica, este planteamiento no tiene visos de poder transformarse en una construcción históricamente viable. Para ello se tendrían que superar limitaciones culturales a fin de que los sectores de altos ingresos orienten su comportamiento hacia la acumulación, en vez de revestir —como es el caso ahora— un carácter consumista o, como sucede en algunos grupos, todavía claramente señorial (véase el comportamiento especulativo del sector financiero privado).¹⁵

Pero —independientemente del cuestionamiento anterior— aceptemos que pueda ser posible. Aun en esta hipotética posibilidad resulta claro que el proceso llevará un tiempo prolongado durante el cual se enfrentarán los riesgos de perturbación del orden político, por cuanto existen problemas que requieren ser resueltos en el corto plazo. Es en este contexto que se plantea la pregunta acerca de si existen alternativas para legitimar las estrategias concentradoras del ingreso.

Parecería que la alternativa consiste en transformar la marginalidad y la pobreza en mecanismos de legitimación a partir de la imposición de un comportamiento pasivo a los sectores excluidos del modelo económico; pasividad que se puede alcanzar ya sea a través del miedo, o bien quizás en forma civilizada, mediante la enajenación consumista. Esto nos confronta con una situación de principio en relación con la idea de democracia: si ésta no reconoce

¹⁵ Según datos del Banco Mundial, el ingreso neto consumido por empresarios privados muestra diferencias enormes entre Argentina (69%) y Estados Unidos (40%), y Austria y Noruega (20%) (Cfr. P. Frederick, *op. cit.*, p. 57).

otra legitimación congruente con su naturaleza que la democracia misma –vista como espacio de expresión para los múltiples actores, con sus respectivas utopías–, la democracia no puede sino consistir en el constante ajuste entre las fuerzas y la consiguiente transformación de las fuerzas antagónicas (transformación que es, por lo demás, resultado de su mismo enfrentamiento, no resuelto e imposible de resolverse, si se parte de la idea de que el conflicto sólo encuentra solución mediante el predominio indisputado de una fuerza sobre las demás).

La democracia supone múltiples actores donde ninguno quede como triunfante en términos absolutos sobre los otros; exigencia que contradice los requerimientos planteados por el modelo económico que reclama apoyarse en una clara hegemonía del sector empresarial (y al interior de éste en los que concentran la mayor capacidad de competitividad).

Es necesario redescubrir a los actores de la democracia en su constante transformación y a la democracia, por su parte, como la posibilidad misma de la democracia; esto es, como la apertura a nuevos espacios que plantea la reivindicación no sólo de la pluralidad cultural, social y política, sino también la del sujeto individual. Teóricamente se plantea la construcción de alianzas que tengan la capacidad de transformarse en actores, a fin de evitar (pues ésa ha sido la enseñanza de la historia) que estas alianzas se limiten a ser el camino para crear las clientelas del núcleo dominante.

De ahí que sea necesario tener claridad entre los tipos de actores: por una parte, aquellos actores que tengan capacidad propositiva (programática), y de otra, los actores en contraposición a las posturas de los que son dominantes (aunque sea coyunturalmente). Con ello se destaca un juego político que contraviene la exigencia de una continuidad ordenada de la reproducción de un solo sector social con base en el mantenimiento de una misma estrategia económica. La democracia impide que se garantice la reproducción lineal de la opción neoliberal, de manera que los esfuerzos por alcanzar esta garantía indefectiblemente terminen, en algún momento, por atentar en contra de la democracia.

El dilema actual de la democracia es poder resolver la relación entre libertad y justicia social; que la transacción de bienes y servicios no reduzca la realidad social, cultural y política a esa lógica que enfatiza dimensiones particulares de la realidad socio-histórica. La subordinación de toda la realidad socio-cultural a las exigencias de la reproducción económica significa reforzar la unidimensionalidad del hombre y con ello agudizar las tensiones internas a la democracia. La democracia, como la concebimos, obliga a tomar en cuenta todas las dimensiones de la vida para poder legitimar al orden económico. Si la democracia deja de consistir en espacios de confrontación entre actores sociales y políticos deviene en una nueva modalidad de oligarquización.

Desde esta perspectiva interpretamos la llamada democracia por delegación de la autoridad, la cual se traduce en la conformación de cúpulas políticas discrecionales, divorciadas de sus bases sociales, mucho más sometidas a dinámicas internas de alianzas transversales (que cruzan sus diferencias ideológicas, muchas veces simples resplandores crepusculares de su pasado) que a las exigencias de la representación política de sectores sociales determinados.

No puede extrañarnos que como resultado de este proceso actualmente los partidos políticos enfrenten serios problemas por su falta de representatividad. Al perder el sistema político su capacidad de lectura de los intereses plurales en coexistencia, pierde eficacia y, en consecuencia, legitimidad; pero simultáneamente, al perder legitimidad pierde también eficacia al no permitir que las decisiones políticas se traduzcan en la creación de espacios de administración de políticas que se puedan reproducir en el largo tiempo.

La democracia consiste en un intercambio entre actores sociales de visiones y valores acerca de la realidad. La función de esta confrontación es legitimar en el corto tiempo las propuestas que se pretenden globalizar para el largo tiempo. En el fondo, la democracia encuentra su más profundo significado cuando facilita la creación de un sentido cotidiano de la historia. De no hacerlo se vacía de contenido, generando indiferencia y apatía para transformarse en una construcción política que fácilmente alberga su propia destrucción. Es lo que ocurre cuando se produce la fusión entre clase política y grupos de presión económica, que está siendo exigida por la imposición de un proyecto de crecimiento excluyente y que, en el plano ideológico, se manifiesta en la reducción de la política a una tecnología de poder abandonando su dimensión utópica.

Si la democracia encuentra su legitimidad en sí misma, en su propio proceso de profundización, configura a la vez un discurso político concreto y utópico sobre la pluralidad y la heterogeneidad. En este sentido es incompatible con un orden rígido que no acepte los espacios del disenso. Pero también es incompatible con estrategias que impidan el surgimiento de actores individuales y sociales, pues no compatibiliza con la subalternidad, ni con la pasividad, como tampoco con el conformismo. Si el bienestar se ha de alcanzar sin desmedro del individuo, y si a éste se trata de reivindicarlo sin desmedro de la igualdad, no se ha concebido ninguna utopía más histórica que la democracia.